

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARINO MEJÍA MARULANDA
DEMANDADOS	COLPENSIONES, AFP PROTECCIÓN S.A., y PORVENIR S.A.
RADICADO	05001-31-05-021-2021-00083-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Modifica y Confirma

Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente; procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **MARINO MEJÍA MARULANDA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y las **AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 026**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 30 de marzo de 2022; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que, el demandante, quien nació el 12 de junio de 1958 y ya tiene cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde enero de 1981; que luego se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, desde julio de 1994 a través de la AFP PROTECCIÓN S.A; y, finalmente se trasladó desde septiembre de 2005 a PORVENIR S.A., donde permanece actualmente.

Se duele que los asesores ejecutivos del RAIS no le brindaron la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante en cada uno de los momentos en que lo atendieron para afiliarse a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A, por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su traslado de régimen pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por las administradoras del régimen privado, y que en consecuencia, se ordene a los fondos demandados trasladar a COLPENSIONES los aportes pensionales realizados incluyendo los rendimientos financieros, debiendo ordenar a esta última entidad recibir dichas sumas, aceptar al demandante en el régimen de prima media con prestación definida sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral, reconociéndole la pensión de vejez y condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las demandadas, a dar respuesta a la misma, a través de sus respectivos apoderados judiciales.

PORVENIR S.A. dio respuesta a la demanda a través de escrito obrante en el PDF 9 del expediente digital. A través de dicha réplica indicó que no le constaban los hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones de la misma y, formuló las excepciones perentorias de “*PRESCRIPCIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, y BUENA FE*”.

PROTECCIÓN S.A. descorrió el traslado de esta acción (PDF 7).

A través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; negó los hechos de la demanda, salvo la movilidad que el asegurado ha tenido entre varias administradoras del RAIS, y; propuso las excepciones perentorias que denominó “*Inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, Buena fe, Prescripción, Aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones, Traslado de Aportes, Traslado y movilidad dentro del RAIS a través de diferentes AFP convalida la*

voluntad de estar afiliado a dicho régimen, Traslados entre AFPs como actos de relacionamiento en términos de la sentencia SL4934 de 2020 y la Excepción innominada o genérica”.

COLPENSIONES, hizo lo propio, y su contestación se observa en el expediente digital (PDF 8 del expediente digital).

A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; aceptó la afiliación del demandante, su edad, la afiliación inicial, su traslado y el agotamiento de la reclamación administrativa, negando los demás hechos, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER UNA PENSIÓN DE VEJEZ, CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA – PARTICULARIDADES DEL CASO, INEXISTENCIA DE VICIO EN EL CONSENTIMIENTO, DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN – SEGUROS PREVISIONALES – COMISIONES – VALORES INDEXADOS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS”.*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 30 de marzo de 2022, el Juez de conocimiento accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad a través de las administradoras PROTECCIÓN S.A y PORVENIR S.A.

Ordenó a PORVENIR S.A., como actual administradora pensional del demandante, la obligación de trasladar a COLPENSIONES, sin precisar en qué término, los saldos contenidos en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos generados y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima. A su vez, le ordenó a PROTECCIÓN S.A., trasladar a COLPENSIONES, los descuentos realizados a la demandante por cuotas de

administración y las sumas de las primas previsionales, durante las calendas en que el asegurado perteneció a esas administradoras.

A COLPENSIONES le ordenó aceptar el retorno de la demandante, recibir las mencionadas sumas, activar su afiliación a prima media sin solución de continuidad.

Con relación a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez elevada por el actor, consideró que, pese a que cuenta desde junio de 2020 con la edad mínima pensional y tiene más de 1900 semanas cotizadas, por lo que declaró causado el derecho a la pensión de vejez, advirtió que el asegurado, aún se encuentra cotizando al sistema pensional, indicando que no se ha configurado el disfrute de la prestación. En consecuencia, declaró que el señor MARINO MEJÍA MARULANDA tiene derecho a la pensión de vejez, postergando su disfrute al momento en que acredite el retiro definitivo del sistema pensional.

Condenó en costas procesales a PROTECCIÓN S.A., absteniéndose de imponer condena en costas a PORVENIR S.A. y COLPENSIONES.

El principal argumento del A quo para declarar la ineficacia, marcó un alejamiento parcial de la tesis jurisprudencial de la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, enfocándose más en el carácter fundamental e irrenunciable del derecho a la pensión, con fundamento en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, y una desmejora económica en el monto de la pensión en el RAIS que encontró probada.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue apelada por la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A.

Su disenso fue parcial con la sentencia, y consistió en su inconformismo con la orden de trasladar a COLPENSIONES las comisiones de administración descontadas por la entidad. Lo sustentó afirmando que esos descuentos se realizaron en virtud de una disposición legal válida, exequible y vigente como lo es el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y no por mero capricho de la entidad y se trata de comisiones ya causadas y debidamente pagadas que existen en ambos regímenes. Agregó que, se trata de descuentos que tienen una destinación específica en la ley, por lo que se depositan en cuentas independientes, no tienen por finalidad financiar la mesada pensional y compensan la generación de rendimientos que se generaron sobre el capital ahorrado.

Solicitó que, en el hipotético caso de que se mantenga esa orden, se le ordene a la demandante devolver todos los rendimientos financieros que se generaron en su favor mientras estuvo afiliada a PROTECCIÓN S.A, ya que la consecuencia jurídica de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior y dichos rendimientos solo se generan en esa proporción en el régimen de ahorro individual de solidaridad, concluyendo que, de haber estado afiliada la demandante a prima media no se le hubieren generado esos rendimientos.

Argumentó que con la orden de devolución de las cuotas de administración se estaría generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, ya que dicha entidad estaría recibiendo los rendimientos y dichos descuentos.

Solicitó se aplique la prescripción sobre la obligación de trasladar estos descuentos, toda vez que se trata de obligaciones de tracto sucesivo que no tienen por finalidad financiar la pensión de vejez, porque se depositan en cuentas diferentes de destinación específica, y ha transcurrido el tiempo suficiente para que se configure dicho fenómeno extintivo.

Alegatos de Conclusión:

En la debida oportunidad procesal, la apoderada judicial de la AFP PORVENIR S.A., presentó sus alegatos de conclusión, a través de los cuales insistió en la improcedencia de la declaratoria de ineficacia del acto de traslado, pasando por el análisis de los vicios del consentimiento, los aspectos facticos y jurídicos por los que la sentencia de primera instancia debe revocarse, y haciendo hincapié en el principio de la sostenibilidad financiera de las entidades, respecto a la manera cómo deben operar las restituciones mutuas para hacer compatible el régimen y la sostenibilidad del sistema, en consonancia con el concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020 Radicación 2019152169-003-000 el cual fue solicitado por ASOFONDOS.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de apelación; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones relacionada con la declarada ineficacia de traslado de régimen pensional y la aceptación del demandante en el régimen de prima media con prestación definida que

administra, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, que realizó el demandante, a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. como la primera administradora del régimen privado en pensiones a que se afilió alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos y, si en lo sucesivo su traslado a PORVENIR S.A., corrió igual suerte.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de

2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante en el PDF 3 del expediente digital, se constata que el señor MARINO MEJÍA MARULANDA, se afilió al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde enero de 1981; que luego se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, desde julio de 1994 a través de la AFP PROTECCIÓN S.A; y, finalmente se trasladó desde septiembre de 2005 a PORVENIR S.A., donde permanece actualmente.

Ahora, revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional del actor, esta Sala encuentra que, si bien la argumentación del juez de primera instancia no estuvo alineada a la tesis de la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia en el tema de la ineficacia, en tanto dirigió sus consideraciones más por el tema del derecho irrenunciable a la seguridad social y la desmejora económica que estaba sufriendo el actor por permanecer en el RAIS, no puede negarse que la conclusión a la que llegó fue la de la ineficacia, aunque por otra vía, plenamente justificada y procedente en este caso; además de haber cumplido con la carga argumentativa que le imponía el alejamiento del precedente. Así, la conclusión a la que arribó el A quo se encuentra ajustada al sentido de la jurisprudencia nacional, y consulta las particularidades del caso, teniendo en cuenta que las AFP convocadas a juicio (PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A) no alcanzaron a probar haberle brindado asesoría al actor con suficiencia en su proceso de traslado, en el momento en que lo atendieron para afiliarlo.

Como lo ha decantado pacíficamente la jurisprudencia del órgano de cierre (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), es claro que la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados. La simple firma del formulario por parte de la asegurada no puede tenerse como una prueba de que se le haya informado a cabalidad de todos los pormenores que

le implicaban el cambio de régimen, y por ello el acto jurídico terminó afectado en su eficacia.

En consecuencia, **se confirmará** la sentencia de primera instancia, al haber declarado la ineficacia del traslado del señor MARINO MEJÍA MARULANDA dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad.

Bajo el anterior escenario, la situación pensional del demandante, retorna al mismo estado en que se encontraba antes de suscribir el acto ineficaz de traslado a la AFP PROTECCIÓN SA., esto es, se encuentra válidamente afiliado al RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA, administrado en la actualidad por COLPENSIONES, encontrándose también afectado de ineficacia su posterior traslado a PORVENIR S.A.

Ahora, debe decirse que el hecho de que el asegurado haya tenido movilidad en el régimen de ahorro individual con solidaridad no constituye una razón para que se entienda que los actos jurídicos que realizó en el RAIS a través de las mencionadas administradoras, hayan alcanzado a producir efectos jurídicos.

El tema de las devoluciones económicas es pertinente revisarlo en virtud de la competencia en Grado Jurisdiccional de Consulta de que dispone este colegiado, que impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele al demandante, tema que también constituye punto de disenso por la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de apelación.

Sostiene la recurrente para oponerse a la orden de devolver a COLPENSIONES las cuotas de administración, que esos descuentos se realizaron en virtud de una disposición legal válida, exequible y vigente como lo es el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y no por mero capricho de la entidad y se trata de comisiones ya causadas y debidamente pagadas que existen en ambos regímenes. Agregó que, se trata de descuentos que tienen una

destinación específica en la ley, por lo que se depositan en cuentas independientes, no tienen por finalidad financiar la mesada pensional y compensan la generación de rendimientos que se generaron sobre el capital ahorrado. Asu vez, solicitó que, en el hipotético caso de que se mantenga esa orden, se le ordene al demandante devolver todos los rendimientos financieros que se generaron en su favor mientras estuvo afiliado a PROTECCIÓN S.A, ya que la consecuencia jurídica de la ineficacia es que las cosas vuelvan al estado anterior y dichos rendimientos solo se generan en esa proporción en el régimen de ahorro individual de solidaridad, concluyendo que, de haber estado afiliado a prima media no se le hubieren generado esos rendimientos.

Argumentó que con la orden de devolución de las cuotas de administración se estaría generando un enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES, ya que dicha entidad estaría recibiendo los rendimientos y dichos descuentos y solicitó se aplique la prescripción sobre la obligación de trasladar estos rubros, toda vez que se trata de obligaciones de tracto sucesivo que no tienen por finalidad financiar la pensión de vejez, porque se depositan en cuentas diferentes de destinación específica, y ha transcurrido el tiempo suficiente para que se configure dicho fenómeno extintivo.

Esta sala encuentra que no le asiste razón a la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A, por cuanto, a COLPENSIONES debe garantizársele la integridad de la cotización sin descuento alguno, ya que será quien reciba la afiliación del asegurado y, para todos los efectos legales lo tenga afiliado al fondo público sin solución de continuidad. No puede perderse de vista que COLPENSIONES es la entidad que a futuro deberá asumir el pago de las prestaciones de la seguridad social del afiliado, y deberá asumir la afiliación sin solución de continuidad en el tiempo.

Los efectos de la ineficacia se traducen en el hecho de que las cosas deban retornar al estado anterior, resultando intrascendente que el actor haya percibido unos rendimientos financieros a partir de la gestión administrativa de los fondos privados demandados, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué ver diezmada la cotización, ya que los referidos descuentos también existen en

el régimen de prima media con prestación definida, y no deben ser realizados por PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., sino por COLPENSIONES, que es donde siempre ha permanecido afiliado el actor. Desde este punto de vista, no le asiste razón a la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. en cuanto a que en el sub judice se estaría generando un enriquecimiento sin causa con la orden de devolución de estas cuotas de administración, ya que se trata simplemente de que opere un descuento en favor de la administradora donde siempre ha permanecido el actor, que no es otra que COLPENSIONES, y los rendimientos que la entidad está percibiendo hacen parte integrante de la cuenta de ahorro individual del asegurado y no constituyen los rubros que la entidad puede descontar por la actividad financiera pensional que realiza; por dichas razones no existe tal enriquecimiento sin causa.

Al respecto, resulta oportuno citar el reciente criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien, en sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, ha recordado que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

Ahora, pretender, como lo hace la recurrente (PROTECCIÓN S.A.), que se prive al demandante de los rendimientos financieros como una consecuencia derivada de que todas las cosas deban volver al estado anterior no resulta de recibo, ya que ello implicaría que las administradoras privadas de pensiones reporten beneficio de su propia impericia e imprudencia.

Es de tal relevancia el principio de sostenibilidad financiera y la importancia de que el mismo no se vea limitado por omitir ordenar retornar todos los descuentos que le hicieron a la cotización, que esta sala advierte que la orden dada por el A quo en los numerales 2º y 3º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, resulta insuficiente, y poco consecuente con el efecto de ineficacia. En efecto, esta sala no comparte la postura del A quo

consistente en ordenar a PROTECCIÓN S.A. como primera administradora del RAIS a la que se trasladó el actor, que le ordene devolver las cuotas de administración y las primas previsionales, y que, a PORVENIR S.A. como la actual administradora a la que está afiliado, que únicamente le ordene el traslado de los porcentajes de garantía de pensión mínima, estableciendo un criterio diferenciador entre ambas administradoras, simplemente sustentado en un criterio secuencial de que una hubiere sido la primera y la otra la segunda, perdiendo de vista que ambas incumplieron sus deberes de asesoría y buen consejo y que, conforme al precedente, no existen razones diferenciadoras desde el punto de vista del elemento de existencia del acto jurídico.

De otro lado, omitió el A quo indicar un término dentro del cual deban llevarse a cabo los traslados económicos de retorno, que deben cumplir PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., no ordenó íntegramente que ambas administradoras trasladen, además de las sumas que se encuentran en la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos, que es una orden que exclusivamente deberá cumplir PORVENIR S.A. como la actual administradora, que ambas trasladen las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima y que, dichas sumas, estos tres rubros, los trasladen debidamente indexados. Tampoco advirtió el A quo a los fondos privados demandados, que dichos traslados deben hacerlos detalladamente y con la respectiva discriminación de cada concepto.

La indexación ordenada comprende la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}$$

Esta medida de actualización monetaria ha sido reiterada recientemente por la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias SL3202, SL3709, SL3710 y SL3769 de 2021, criterio que acoge esta Colegiatura, recogiendo en consecuencia cualquier otra interpretación en sentido contrario que se hubiere sostenido en el pasado.

En consecuencia, esta sala **MODIFICARÁN** los numerales 2º y 3º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, por comprender ordenes de traslado disímiles e injustificadas a la primera y segunda administradora, para en su lugar ORDENAR a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, trasladen con destino a COLPENSIONES, no solo las sumas que se encuentran en la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos, que es una orden que exclusivamente deberá cumplir PORVENIR S.A. como la actual administradora, sino que también ambas trasladen en el referido término, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima y que, dichas sumas, estos tres rubros, los trasladen debidamente indexados, advirtiéndoles a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A., que, al momento de cumplir la orden impartida, deberán remitir a Colpensiones la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Finalmente, debe decirse, con relación a la orden del A quo de ordenar a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de vejez al señor MARINO MEJÍA MARULANDA, que, no existe ninguna duda en que su derecho a la pensión de vejez se causó el 12 de junio de 2020 cuando arribó a los 62 años de edad, ya que, para dicha fecha reporta una densidad de semanas muy superior a las 1300 semanas, en tanto actualmente cuenta con más de 1,900 semanas cotizadas. Asimismo, es acertada la decisión del A quo de dejar sometido el disfrute de la pensión de vejez del demandante al retiro definitivo del sistema pensional, como quiera que el propio demandante confesó en el interrogatorio de parte que aún se encuentra cotizando al sistema pensional.

De esta manera, al habersele garantizado a COLPENSIONES percibir íntegramente las cotizaciones del actor, incluso con la respectiva actualización monetaria y los rendimientos sobre el capital contenido en la cuenta de ahorro individual, esta sala advierte que no existe ningún perjuicio u orden in justificada

que no deba asumir COLPENSIONES, tal y como se le ordenó el reconocimiento pensional una vez haya operado el retiro del sistema pensional.

COSTAS PROCESALES DE SEGUNDA INSTANCIA

En esta instancia se han causado costas procesales a cargo de PROTECCIÓN S.A, teniendo en cuenta la desventura del recurso de apelación formulado por PROTECCIÓN S.A. Las mismas serán en favor del señor MARINO MEJÍA MARULANDA, y ascenderán las agencias en derecho a la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2º y 3º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Apelación y Consulta, para en su lugar **ORDENAR** a **PROTECCIÓN S.A.** y **PORVENIR S.A.** que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, trasladen con destino a COLPENSIONES, no solo las sumas que se encuentran en la cuenta de ahorro individual con sus respectivos rendimientos, que es una orden que exclusivamente deberá cumplir **PORVENIR S.A.** como la actual administradora, sino que también ambas trasladen en el referido término, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes de garantía de pensión mínima y que, dichas sumas, estos tres rubros, los trasladen debidamente indexados, advirtiéndoles a **PROTECCIÓN S.A.** y a **PORVENIR S.A.**, que, al momento de cumplir la orden impartida, deberán remitir a **COLPENSIONES** la relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de

los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

TERCERO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a **PROTECCIÓN S.A.** Agencias en derecho: un (1) salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 y en favor del señor **MARINO MEJIA MARULANDA**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada